ECONOMÍA / POLÍTICA

Las empresas se juegan más de 1.500 millones en las elecciones

LAS OPERACIONES QUE ESTÁN EN LIZA/ Los grupos inmobiliarios, fondos de inversión y gestores sanitarios y culturales están a la espera de ver el futuro de miles de proyectos que la oposición amenaza con parar.

Bernat García. Madrid

El sector privado se muestra expectante ante el resultado de las elecciones autonómicas y locales del próximo 24-M. Empresas inmobiliarias, grupos sanitarios, fondos de inversión y gestores culturales están muy atentos al resultado de estos comicios que, dependiendo de los nuevos Gobiernos, podría llegar a paralizar proyectos de ventas ya anunciados de hasta 1.512 millones anuales. Este es el capítulo que aparece en los presupuestos de las regiones en liza como enajenaciones de inversiones reales e ingresos patrimoniales, según datos recabados por este periódico.

El bipartidismo tradicional ha respetado en gran manera la evolución de proyectos económicos a pesar de un cambio de gobierno, hasta ahora. El ascenso repentino de fuerzas como Podemos o Barcelona en Comú ha forzado a los partidos a desprestigiar este tipo de operaciones, y ahora, en plena campaña electoral, se están poniendo en cuestión.

La Comunidad de Madrid es un claro ejemplo. Lidera los proyectos de ventas y privatizaciones, con un monto de 685 millones solo para este año, más otros 116 millones en ingresos patrimoniales. Conforman el grueso de estas operaciones las ventas de inmuebles propiedad del Ejecutivo regional, por lo que grupos inmobiliarios y fondos de inversión están especialmente atentos a este capítulo. Fuentes de la Comunidad aseguran que se ha paralizado el grueso de los dossieres de venta hasta que se conozca la opinión del nuevo gabinete. Entre ellas, un paquete de residencias de lujo en Gran Vía, Serrano o Barrio de las Letras, por unos 10 millones de euros, o paquetes de oficinas por 25 millones.

No está en las cuentas, sin embargo, la gestión hospitalaria. Grupos como PSOE y Ciudadanos, por no hablar de Podemos, han anunciado que revisarán las concesiones de los hospitales ya externalizados. Esto afecta directamente a grupos como Sanitas o IDC Salud, que operan los hospitales de Collado Villalba, Torrejón de Ardoz, Valdemoro y Móstoles. El PP aseguró hace unas semanas que imposibilitaría definitivamente la externalización de otros cinco hospitales, que habían sido adjudicados a Ribera Salud, Hima San Pablo y, de nuevo, Sanitas.

Otro gran proyecto que se encuentra ahora en plena adjudicación en la Comunidad es la Ciudad de la Justicia, donde las alianzas de OHL y Acciona y Ferrovial y ACS optan por repartirse un contrato en Valdebebas con un valor de 1.000 millones de euros en los próximos 30 años.

Otro gobierno autonómico del PP, el de la Comunidad Valenciana, puede también tener los días contados y con él sus grandes proyectos económicos. Tiene presupuestado en 2015 un paquete de privatizaciones de 150 millones de euros. El premio gordo es la gestión del Oceanogràfic y del Àgora, que se encuentran en el enorme recinto de la Ciudad de las Artes y la Ciencias (Cacsa). La empresa pública valenciana ha iniciado los tramites de esta licitación, valorada en 66 millones de euros.

Castilla y León, aunque es la región donde el PP tiene más visos de revalidar su mayoría absoluta, es la tercera autonomía que más ha presupuestado en ventas. En concreto 150 millones este año que se extenderán a los 265 millones hasta el año 2018, y que incluye un portafolio de más de 1.670 inmuebles.

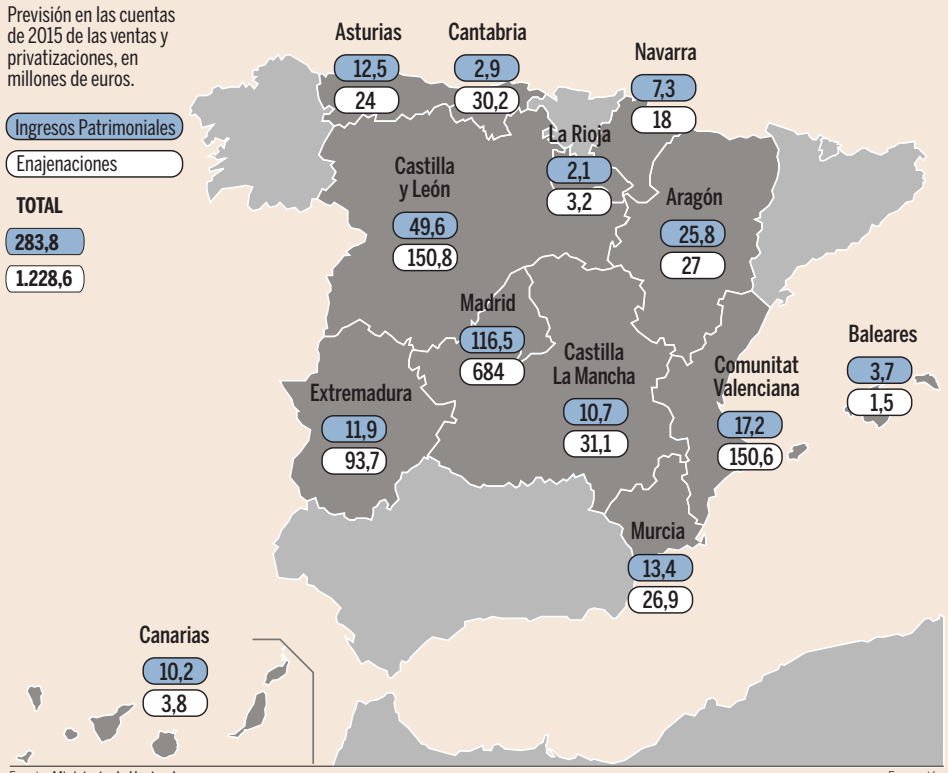
Extremadura, por su parte, tiene previsto vender unos 100 millones de euros este mismo año, algo que podría cambiar si José Antonio Monago no revalida su mandato.

El argumento de la irretroactividad de estas operaciones no convence a los grupos empresariales. Los adjudicatarios todavía recuerdan como se canceló su contrato de gestión sanitaria en Madrid por parte del PP, y en Cataluña sigue coleando el culebrón de la privatización de Aigües Ter-Llobregat. La entrada de nuevas fuerzas provocará aún más inestabilidad.

Editorial / Página 2

LAS OPERACIONES EN JUEGO DE LAS AUTONOMÍAS CON ELECCIONES, EN CIFRAS

Previsión en las cuentas de 2015 de las ventas y privatizaciones, en millones de euros.



Fuente: Ministerio de Hacienda

Expansión

En la Comunidad de Madrid, toda la oposición aboga por "revisar" la gestión privada hospitalaria

Las CCAA prevén 1.228 millones en ventas y 284 millones en ingresos patrimoniales

Incertidumbre en las grandes operaciones inmobiliarias

Madrid: La 'Operación Chamartín' pende de un hilo tras las elecciones

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, deja a medias varios de los mayores proyectos empresariales. La operación Chamartín, Castellana Norte, con un impacto de 1.000 millones en 10 años, iba a aprobarse en un pleno extraordinario a dos semanas de las elecciones. Finalmente no se hizo. Mercedes González, de los socialistas madrileños, sostiene: "Vamos a parar y revisar todos los proyectos", incluido este. Pero no es el único proyecto que Botella no ha terminado. La operación 'Campamento', una macroventa de solares que puede ascender a 250 millones, acaba de salir a la venta. Otro de los grandes proyectos de la ciudad, la creación de un hotel en Plaza España por el grupo chino Wanda, también puede caer en saco roto con un nuevo consistorio: tiembla una inversión de unos 30 millones de euros.

Barcelona pone en espera el hotel en el edificio Deutsche Bank

En Barcelona, aunque con proyectos de menos tamaño, el alcalde Xavier Trias deja también una carpeta de asuntos pendientes. La transformación en hotel de la actual sede de Deutsche Bank en calle Diagonal, y que el grupo KKH compró por 40 millones. Gracias a unas permutas, iba a derribar el edificio y levantar otro mayor. Trias finalmente tuvo que dejar la operación para el siguiente mandato. Ada Colau, alcaldable por BeC, sostuvo hace días que ese edificio llevaba el nombre de "vivienda social", y ha puesto en jaque a los inversores. Trias también planteó el traspaso de la gestión de aguas freáticas a la Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, participada por AMB, Suez, y Criteria. El 'efecto Colau' llevó sin embargo al PSC a poner peros a la operación.

España acogerá al 9% de los que piden asilo en la UE

Expansión. Madrid

España deberá acoger al 9,1% de los demandantes de asilo que se reubicarán en los próximos meses en todos los países de la UE desde los Estados miembros más afectados por la actual crisis migratoria en el Mediterráneo (en particular, Italia, Grecia y Malta), según informa *Europa Press*.

También tendrá que hacerse cargo de 1.549 personas dentro del programa que Bruselas quiere poner en marcha para transferir a Europa de manera segura y legal a 20.000 demandantes durante los años 2015-2016, según el nuevo sistema de cuotas propuesto ayer por la Comisión Europea.

Las propuestas de Bruselas, si son aprobadas por los Gobiernos y la Eurocámara, obligarán a España a incrementar considerablemente el esfuerzo realizado en los últimos años en materia de asilo. España se encuentra entre los países de la UE donde se registran menos peticiones de acogida y el año pasado concedió protección internacional sólo a 1.600 personas (el 1,15% de las decisiones positivas en toda la UE) y aceptó acoger a 125 refugiados en programas de asilo.

Cuotas

Las cuotas para repartir constituyen la iniciativa más novedosa de la nueva Agenda Europea de Inmigración presentada por el Ejecutivo comunitario, que pretende imponer una mayor solidaridad entre los Estados miembros. Bruselas ha calculado las cuotas basándose en cuatro criterios: el PIB, el tamaño de la población, la tasa de paro y la media de peticiones de asilo tramitadas y refugiados reubicados entre 2010-2014.

El número total de personas a reubicar mediante este sistema temporal de emergencia sólo se conocerá a finales de mes, cuando el Ejecutivo comunitario tiene previsto presentar su propuesta legislativa. El Estado miembro receptor será el responsable de examinar las demandas de asilo de estas personas. Los países afectados por la presión migratoria –sobre todo Italia, Grecia y Malta–, no tendrán que participar. Las cuotas para reubicar inmigrantes serán obligatorias.